



Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Fusagasugá

Diagonal 16 No. 11-85
Palacio de Justicia Oficina 101
j01cmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co

Al Despacho de la señora juez, hoy 17 de marzo del 2022, informando que la parte actora guardo silencio al traslado del incidente de nulidad. Ingresa para proveer.

La Sria

Ivian Osorio García

Fusagasugá, 18 de marzo del 2022

RADICADO: 2019 00460

Se encuentra el proceso al despacho para decidir el incidente de nulidad propuesto por la Dra. Karen Clavijo Estrada, para lo cual contaremos con los siguientes:

ANTECEDENTES

Señaló, la incidentante que, a su representado le fue vulnerado el derecho al debido proceso en cuanto a la ejecución del amparo de pobreza, toda vez que los abogados previamente designados no intervinieron de manera oportuna en la defensa técnica para procurar la realización de actos de contradicción, solicitudes probatorias, alegación e impugnación dentro del proceso ejecutivo, lo que se evidencia con la contestación extemporánea allegada por el Dr. Carlos Alberto Rojas Martínez, que no tuvo en cuenta las implicaciones legales.

Manifestó, que los procesos deben atender a una serie de derechos y principios constitucionales y legales que no pueden ser desconocidos por las autoridades judiciales, dentro de los que se encuentra el fundamental derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Refirió, que dentro de la garantía del debido proceso, se destaca contar con un abogado que garantice el ejercicio de una defensa técnica, por lo que los Estados tienen un grado de responsabilidad en la organización eficiente, la preparación adecuada y el ajuste a los estatutos de la profesión de los abogados litigantes, máximo cuando se cometen yerros como defensor público, siendo el Estado quien designo al abogado que debía garantizar los derechos, que en el presente asunto no se vieron salvaguardados, al ser vulnerados por el mismo apoderado.

Con arreglo a lo anterior, solicitó se decrete la nulidad del proceso, al ser tangible la vulneración de los derechos del señor Ramiro Eduardo Calderón Rodríguez.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Fusagasugá

Diagonal 16 No. 11-85
Palacio de Justicia Oficina 101
j01cmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Sabido es que nuestro ordenamiento procesal vigente adoptó como principios básicos, tratándose de nulidades procesales, el de la especificidad y el de la convalidación, según el primer no hay defecto capaz de estructurarla sin ley que expresamente la establezca, y el segundo, según el cual las actuaciones judiciales cuya nulidad no se reclame, se convalidan por el consentimiento tácito de la parte afectada; además no son susceptibles del criterio de analogía para aplicarlas y, por consiguiente, no es posible extenderlas a informalidades diferentes.

La nulidad está atada a la comprobación de yerros de garantías de estructura que hagan que las actuaciones posteriores pierdan toda solidez formal y material, por lo que corresponde a quien la solicita la irregularidad de la actuación y la forma en como ella trasgrede las garantías del interviniente.

En tal dirección, se tiene que la solicitud de nulidad que ahora se resuelve, se sustenta en la falta de defensa técnica del demandado, ante la contestación de demanda extemporánea del apoderado designado en amparo de pobreza, circunstancia que en su sentir trasgredió no solo el derecho de contradicción y defensa sino el debido proceso del demandado Ramiro Eduardo Calderón Rodríguez.

Constitucionalmente, se tiene que el derecho al debido proceso tiene la finalidad de resguardar garantías básicas o esenciales de cualquier tipo de proceso, con el fin de *"proteger a los ciudadanos contra los abusos o desviaciones de poder por parte de las autoridades, originadas no solo de las actuaciones procesales sino de las decisiones que se adopten y puedan afectar injustamente los derechos e intereses legítimos de aquellos"*¹. Algunos elementos consustanciales del debido proceso son: el derecho al juez natural, a presentar y controvertir pruebas, el derecho a la segunda instancia, al principio de legalidad, el derecho de defensa material y técnica; la publicidad de los procesos y las decisiones judiciales, la prohibición de jueces sin rostro o secretos

Bajo ese entendido, el derecho a la defensa comprende disponer de asistencia técnica a través de actos de contradicción, notificación, impugnación, solicitud probatoria y alegación, que puede ser ejercida de acuerdo con las circunstancias y los diferentes elementos probatorios recaudados y que permiten a los sujetos procesales ser oídos y hacer valer sus argumentos y pruebas en el curso de un proceso que lo afecta, ya sea

¹ Sentencia T-751A de 1999.



Juzgado Primero (1°) Civil Municipal de Fusagasugá

Diagonal 16 No. 11-85
Palacio de Justicia Oficina 101
j01cmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co

por medio de un abogado designado por confianza o uno asignado en amparo de pobreza.

Puestas así las cosas y tras la revisión del acontecer procesal, resulta evidente para esta juzgadora, que el demandado Ramiro Eduardo Calderón, fue notificado de manera personal del proceso de la referencia, el 15 de noviembre del 2019, por lo que compareciendo a éste, el 29 del mismo mes y año, solicitando la designación de apoderado judicial en amparo de pobreza, ante la imposibilidad económica de nombrar uno de manera personal, en virtud de lo cual, este estrado judicial concedió lo solicitado, designando para tal efecto al Dr. Carlos Alberto Rojas Martínez, quien pese a la notificación en debida forma, contestó la demanda de manera extemporánea.

En casos como el que hoy ocupa nuestra atención, la Corte ha adoptado criterios estrictos para que la actuación desplegada por el abogado, sea constitutiva de la vulneración de los derechos fundamentales, específicamente en materia penal, así:

"(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no aparece una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso".²

De lo anterior se colige, que la desidia desplegada por el apoderado designado en amparo de pobreza Dr. Carlos Alberto Rojas Martínez, dejó en orfandad jurídica al demandado, a quien le fue vedado el derecho de contradicción y defensa, quedando en indefensión que le impidió participar en el proceso con las garantías fundamentales, frente a lo que se resolverá en auto separado.

² Sentencia T-654 de 1998, posición reiterada en las sentencias: T-776 de 1998, T-957 de 2006, T-737 de 2007.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Fusagasugá

Diagonal 16 No. 11-85
Palacio de Justicia Oficina 101
j01cmpalfusa@cendoj.ramajudicial.gov.co

Las anteriores consideraciones, dejan en evidencia que en procura de garantizar la rectitud y equidad que deben caracterizar a la administración de justicia, se impone para esta juzgadora declarar la nulidad de las actuaciones surtidas en el presente trámite a partir de la notificación del demandado; reiterar la designación como apoderada en amparo de pobreza de la Dra. Karen Clavijo Estrada, quien deberá concurrir en la defensa eficiente y diligente del señor Ramiro Calderón Rodríguez, y contabilizar nuevamente el término para que se conteste la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Primero Civil de Fusagasugá,

RESUELVE:

- 1. DECLARAR FUNDADA LA NULIDAD DE FALTA DE DEFENSA TÉCNICA** de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, dejar sin valor y efecto las actuaciones surtidas en el presente trámite a partir de la notificación del demandado Ramiro Calderón Rodríguez.
3. Reiterar la designación como apoderada en amparo de pobreza de la Dra. Karen Clavijo Estrada, quien deberá concurrir en la defensa eficiente y diligente del señor Ramiro Calderón Rodríguez.
4. Por secretaría, contabilícese nuevamente el término para dar contestación a la demanda.
5. En auto separado resuélvase frente a la conducta del Dr. Carlos Alberto Rojas Martínez.

NOTIFÍQUESE


JOHANNA GUALTEROS GIL
Juez.-

JS

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

La anterior providencia, se notifica
por ESTADO ELECTRÓNICO, hoy 22
de marzo del 2022